

Comentarios de la República Argentina al texto del proyecto de Convenio y del Reglamento General de IALA

En cuanto al proyecto de Convenio, la República Argentina formula las siguientes consideraciones:

1. Denominación de la Organización

IALA tiene una denominación francesa "Association Internationale de Signalisation Maritime" cuya traducción al castellano es "Asociación Internacional de Señalización Marítima". Por su parte, en inglés se denomina "International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities" traduciendo al español como "Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros". En efecto, en 1998 en la Asamblea General de la organización se adoptó la citada denominación inglesa decidiéndose que este cambio no incide en la denominación francesa la cual se mantiene.

Como puede observarse, la denominación de la organización en inglés y en francés difiere. En virtud de ello, el nombre de IALA en español varía dependiendo de cual sea el idioma desde el cual se efectúa la traducción. En este sentido, cabría homogeneizar la denominación en español del organismo.

A estos efectos, la República Argentina apoya la denominación proveniente del idioma inglés, esto es "Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros", por considerarla más amplia y abarcativa en lo que a ayudas a la navegación se refiere.

En virtud de ello, se propone que se adopte dicha denominación para el caso del idioma español. Se hace presente que estas consideraciones son de aplicación tanto para el título como para el articulado del proyecto.

2. Por otra parte, se hace presente que la versión en español del proyecto de Convenio contiene errores en algunos artículos por lo que debiera cotejarse su traducción.

A título de ejemplo, cabe destacar el quinto párrafo del preámbulo que refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) "tales como han sido enmendadas". La referencia a la enmienda resulta pertinente únicamente respecto del último Convenio. Ello, si se encuentra correctamente reflejado en la traducción al inglés que expresa "as amended".

3. El cuarto párrafo del preámbulo reconoce el papel de la IALA. En este sentido, y en tanto que dicho preámbulo toma de base el artículo 2.1 del Convenio de IALA se sugiere que se agregue al final del párrafo la siguiente frase "for the benefit of the maritime community and the protection of the environment".

4. Se hace presente que en varios artículos del proyecto se emplea la expresión "gobierno" como término genérico. En este sentido, se sugiere el uso de la expresión "Estados".

5. El artículo 1.3 refiere a los idiomas de la Organización. A este respecto, dispone que las lenguas oficiales serán el francés, el inglés y el español, mientras que las lenguas de trabajo comprenden solo el inglés y el francés. Al respecto, se solicitan mayores precisiones sobre qué base se excluiría al español de los idiomas de trabajo. Sin perjuicio de ello, la República Argentina propone la inclusión del español como idioma de trabajo.

6. El artículo 4 establece quienes podrán ser Miembros de la Organización. En este sentido, prevé que la Organización se compondrá de Estados (Partes Contratantes) y miembros asociados y miembros afiliados. Acorde a la propuesta, los miembros asociados serán a) territorios o grupos de territorios bajo responsabilidad de una Parte Contratante y con responsabilidad para la regulación, provisión, mantenimiento y/o operación de ayudas a la navegación marítima; y b) los miembros nacionales de la actual IALA. Por su parte, los miembros afiliados serían los actuales miembros asociados e industriales de IALA.

A este respecto, y sin perjuicio de la cuestión de los territorios que se desarrollará en el apartado IV.7, se entiende que las categorías propuestas no resultan prácticas. En efecto, el proyecto presentado propone un enfoque en razón del cual los actuales miembros de IALA se incorporarían junto con los Estados a la Organización Internacional que se cree. Acorde al supuesto que se plantea dentro de la Organización podría estar representado un Estado por una parte y una repartición gubernamental de ese país por el otro lado.

En este marco, atento a la naturaleza de la Organización se entiende que los miembros deben ser los Estados. Por otra parte, se podrían evaluar distintas alternativas para la participación de miembros industriales u organizaciones vinculadas al trabajo de la organización como ocurre en el caso de OMI.

7. En el artículo 4.3 del borrador de Convención, se estipula que cualquier Parte Contratante puede solicitar, por escrito ante el Secretario General de la Organización, la admisión en calidad de miembro asociado de un territorio o grupo de territorios que dependen de su responsabilidad, legalmente responsable para la reglamentación, el suministro, el mantenimiento y/o el funcionamiento de ayudas a la navegación marítima. Una disposición similar se encuentra en los Art. 2.1 y 3.2.b del Reglamento.

En ese sentido, la República Argentina rechaza estas cláusulas destinadas a que territorios de ultramar participen de la Organización en calidad de miembro asociado. Además, resulta oportuno mencionar que tal posibilidad no está prevista en la actual estructura de IALA ni en ninguna de las organizaciones en las que se inspira el proyecto de Convenio (OMI y OHI).

En este marco, se entiende que en razón de la naturaleza intergubernamental de la Organización la participación en ella corresponde a los Estados. Asimismo, se destaca que acorde a la práctica dentro de organizaciones internacionales no resulta conducente la incorporación de territorios.

8. Con relación a las disposiciones vinculadas a cuotas y aportes que se encuentran en la Constitución (Art. 10), Reglamento (Art. 2.5 y 2.6) y Regulaciones financieras (Art. 9 y 10) y Reporte de cuestiones financieras, la República Argentina precisaría contar con

información precisa respecto de la contribución financiera que debería efectuar al organismo a ser creado, dado que esa información no surge con claridad de los documentos mencionados.

9. El artículo 6.2 y 7.5 refieren a la designación de delegados para la Asamblea General, y el Consejo respectivamente. En este sentido, y sin perjuicio de tenerse presente la naturaleza eminentemente técnica de la Organización y de sus debates, se entiende que el instrumento constitutivo de una Organización Internacional no debiera adentrarse en regulaciones acerca de como será la composición de la delegación de cada Estado.

Por otra parte, y en base a las disposiciones contenidas en otros Convenios de naturaleza técnica, podrá evaluarse cual sería el mejor modo de reflejar la representación técnica que requeriría la Organización, tal como ser un punto focal técnico específico o el establecimiento de una representación particular para estos aspectos.

10. El artículo 7 prevé el establecimiento de un Consejo como órgano ejecutivo de la Organización, el cual se compondrá por un máximo de 23 miembros electos y 1 miembro no electo (Francia en su calidad de país anfitrión). A este respecto, la Argentina entiende que se debiera explorar el modo de asegurar un balance en la conformación del Consejo. Por ejemplo, la posibilidad de un balance regional.

11. El artículo 11 contiene disposiciones relativas a la personalidad jurídica, privilegios e inmunidades.

a. Con relación al inciso 1 del artículo 11 se entiende que estas disposiciones refieren primariamente a cuestiones de operatoria interna de la Organización dentro del país sede. Cabe destacar que conforme el artículo 1 del proyecto de Convenio se establece una organización internacional, la cual en razón de su naturaleza jurídica tiene personalidad jurídica. Se entiende que esta cuestión puede especificarse. Sin embargo la redacción empleada no resulta la más conducente en tanto que, tal como se destacara, ella se vincula a cuestiones de operatoria interna.

b. En cuanto al inciso 2 del artículo 11, se hace presente que él prevé que se celebre un Acuerdo con cada Parte Contratante de modo de regular los privilegios e inmunidades de la Organización en su territorio. A este respecto, cabe destacar que lo más conveniente de acuerdo a la práctica internacional es elaborar un acuerdo genérico que después será adoptado por los Estados Miembros. Por su parte, el inciso 3 prevé que la Organización podrá cooperar con los gobiernos, organizaciones y otras estructuras de modo de concluir acuerdos.

En este marco, se entiende que lo más conducente sería emplear una redacción general que refiera a la personalidad jurídica de la Organización así como al hecho de que ella tendrá en el territorio de sus Partes Contratantes los privilegios e inmunidades que fueran necesarios para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos en conformidad al acuerdo que se celebre con sus Partes Contratantes. En este sentido, podría explorarse una redacción que siga la línea de lo previsto en el artículo XIII del Convenio Constitutivo de la OHI, la cual podría expresar: "The Organization shall have legal personality. In the territory of each Contracting Party it shall enjoy, subject to a separate agreement with its Contracting Parties, such privileges and immunities as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its object"

c. La segunda parte del inciso 2 prevé que en el territorio de un Estado Parte de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 la personalidad jurídica, los privilegios e inmunidades son los definidos en dicha Convención. Se entiende que cabría analizar con mayor detalle si resultaría conducente otorgar a la Organización los privilegios e inmunidades allí previstos para Organismos Especializados. Por otra parte, cabe tener presente que se otorgarían distintos privilegios e inmunidades dependiendo si el Estado es Parte o no en la citada Convención. A este respecto, debiera procurarse que se establezca una regulación común para todas las Partes Contratantes.

12. En cuanto al Depositario del Convenio, se hace presente que varios artículos mencionan entre corchetes al gobierno de Francia como posible Depositario. A este respecto, merece destacarse que en la esfera internacional hay tratados en los cuales el Depositario es un Estado como ser el caso de Mónaco en la OHI. A su vez, en un gran número de Convenios se establece como Depositario al Secretario General de las Naciones Unidas. En la práctica resulta más beneficiosa la designación del Secretario General como Depositario en tanto que ello permite asegurar que se adopte un sistema homogéneo y eficaz para la registración y distribución de información. Asimismo, tal designación permite evitar inconvenientes al momento de presentarse notificaciones de entidades no reconocidas como Estado por el país Depositario. En este marco, y a la luz de lo expresado precedentemente se entiende que las delegaciones participantes debieran debatir quién asumirá el rol de Depositario.

Por otra parte, y sin perjuicio de en quién recaiga dicho rol se entiende que sería conveniente incluir una cláusula de designación del Depositario.

13. El artículo 18 contiene "Disposiciones transitorias" que se prevé operen a razón del cambio de estatus de la Organización. Se entiende que resulta positivo contar con claridad acerca de algunas cuestiones que hacen al período de transición y a las necesarias actividades que deberán desarrollarse en consecuencia. Sin perjuicio de ello, los arreglos de transición no pueden implicar un mero traspaso de la anterior estructura y miembros de la IALA a una nueva Organización. En efecto, en razón del cambio en la naturaleza jurídica de la Organización también deberán operar modificaciones en la estructura, como ser la distinta membresía al tratarse de una Organización Intergubernamental (se destaca a este respecto lo señalado en el apartado IV.6). En este marco, se entiende que deberá alcanzarse un equilibrio entre los objetivos y funciones de la actual IALA y los necesarios cambios que deberán efectuarse en razón del cambio en la naturaleza jurídica del Organismo.